

**TRASCENDIÓ**

**Que** por sorpresa tomó al equipo de **Beatriz Paredes** la difusión de las encuestas del comité del Frente Amplio por México, que ponen a la cabeza por 15 puntos a **Xóchitl Gálvez**, porque el comunicado inicial del comité encargado, con fecha del 3 de julio pasado, indicaba que el periodo de levantamiento de la consulta era del 27 al 30 de agosto, por lo que este miércoles debió ser el último día de levantamiento y no de los resultados. Hasta anoche los de la oposición no sabían qué procede en torno a las actividades previstas para el domingo.

**Que** pese a la dispensa prioritaria de trámites cuando aún no se cumplían los plazos acordados en la alianza opositora, con el fin de cuadrar los hechos con el *madruguete* que lanzó desde el lunes **Alejandro Moreno**, dirigente nacional del PRI, para bajar de la contienda de forma prematura a su compañera **Beatriz Paredes**, la tlaxcalteca aguantó la tormenta, no se enganchó con **Alito** y anoche, diplomática ella, declinó por **Xóchitl Gálvez**, con

quien intercambió elogios, pero marcó su raya y se reservó la adhesión al frente “dependiendo del proyecto”.

**Que** la aparición de menores de edad sin la autorización de sus padres en las publicaciones de aspirantes presidenciales se está convirtiendo en un problema, pues ya son reiterados los casos que llegan a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que encabeza **Claudia Zavala**; tan solo ayer se emitieron tres medidas cautelares contra **Marcelo Ebrard** y **Xóchitl Gálvez** por ese tema, en el que uno es reincidente y la otra alegó que no debería aplicarse esa regla en los procesos no electorales.

**Que** este jueves la Fiscalía General de la República, que encabeza **Alejandro Gertz Manero**, acusará formalmente a **Emilio Lozoya**, ex director de Petróleos Mexicanos, por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados. La audiencia intermedia se ha aplazado, porque el juez de control ordenó a la FGR participar en las negociaciones en las que el ex funcionario ofreció un acuerdo reparatorio y puso sobre la mesa 10.7 millones de dólares, pero el gobierno exige 30. —